

20 DE ABRIL DE 2020

El manejo de la emergencia sanitaria por parte del gobierno

Es difícil hacer un diagnóstico acabado respecto de la forma como el gobierno ha manejado la emergencia sanitaria que vive el país, toda vez que existe un extendido consenso que “lo peor está por venir” y existe un riesgo evidente que el sistema público de salud, tal como ha sucedido en otros países, se vea sobrepasado en el caso que la curva de contagios se eleve considerablemente, como se prevé en las próximas semanas.

Ello pese a las reiteradas seguridades que el gobierno, con un cierto “exitismo”, no exento de opacidades, contradicciones e improvisaciones, ha intentado entregar acerca de que se han tomado todas las previsiones y que el sistema sanitario estará en condiciones de responder a esos requerimientos.

En términos comunicacionales, el gobierno ha pecado de un cierto hermetismo, así como falta de claridad y transparencia, para fundamentar algunas de sus decisiones al decretar medidas de cuarentena selectiva en algunas comunas o parte de ellas. O el levantamiento de estas medidas en algunas comunas.

La propia decisión de entregar los llamados carnets “Covid-19” a pacientes recuperados-supuestamente “no infectantes”, pese a no existir suficiente evidencia científica al respecto. Ha generado polémicas entre los expertos.

Con todo, la llamada estrategia “dinámica” o progresiva en términos de medidas preventivas, parece haber funcionado, hasta ahora, razonablemente bien y aunque mucho se discute acerca de la confiabilidad de las cifras oficiales (no tan sólo en nuestro país), Chile, si bien aparece con un alto número de infectados, más de 10.000 a la fecha, exhibe una de las más bajas tasa de letalidad de la región).

Todo ello a pesar de las críticas y presiones de alcaldes, autoridades del colegio médico y diversos expertos, para adoptar tempranamente medidas más drásticas para prevenir los contagios, que pudieran resultar indispensables en momentos aún más críticos y que no son sustentables por períodos muy extendidos, como lo ha afirmado el propio Presidente de la República.

Por lo mismo, no deja de sorprender que en medio de la emergencia, cuando el país no alcanza el punto más alto de contagios, que según algunas estimaciones pudiera ocurrir a mediados o fines

de mayo, o incluso a principios de junio, el gobierno, sin consultar con los actores sociales, o a la mesa de expertos, ni tan siquiera informar a su coalición, haya resuelto la vuelta de los trabajadores públicos a sus lugares el trabajo, el retorno de los estudiantes a clases o la reapertura de los malls. Una medida que el gobierno, frente a un extendido rechazo y cuestionamientos, se ha visto obligado a relativizar y matizar, sosteniendo que ello no se materializaría en abril sino en mayo, será de manera gradual, excluiría a las personas en situación de riesgo y con todas las medidas de prevención sanitarias que se requieran.

Esta apresurada e inconsulta decisión presidencial se inscribe en un extendido y generalizado esfuerzo de muchos países de retornar a la normalidad lo más rápido que se pueda, asumiendo que el aislamiento social y la paralización de las actividades económicas es simplemente insostenible en el tiempo y que el mundo debe asumir “una nueva normalidad”, a la que se ha referido el presidente, que implica convivir con la amenaza del coronavirus por los próximos años.

Más temprano que tarde el país deberá intentar volver a “la normalidad”, una nueva normalidad. Pero deberá hacer de manera gradual, evitando exponer innecesariamente no tan sólo a la población de alto riesgo sino a todos aquellos que puedan quedarse en sus casas sin afectar actividades esenciales para el país. Y asegurando adecuadas condiciones sanitarias para quienes deban hacer trabajo presencial o retomar sus actividades académicas. Y especialmente a los estudiantes y profesores.

Sin lugar a dudas existe una diferencia muy relevante entre países que parecen haber llegado al punto más alto de la epidemia y que entran en la temporada estival, como Europa, y América latina, que aún debe enfrentar períodos más críticos de la epidemia, que coinciden con la llegada del otoño.

No se puede desdeñar la legítima preocupación de diversos gobiernos por el fuerte impacto económico y social que ha generado la pandemia y que amenaza con agravarse en el futuro inmediato a partir de la recesión mundial, el impacto en los principales socios comerciales de la región (China y EE. UU.) y las graves consecuencias para las economías de los países emergentes.

Pero, la necesidad de compatibilizar el combate en contra de la epidemia, con la prioridad puesta en la defensa de la vida y la salud de la población, con la necesidad de proteger los ingresos y empleos, así como sus fuentes laborales y las actividades económicas, no puede relativizar o trastocar esas prioridades.

El manejo social de la emergencia

Hoy el país, al igual que muchos de los países, no tan sólo vive una emergencia sanitaria sino también una grave emergencia social y una fuerte crisis económica, que obliga a los gobiernos a reaccionar con energía y decisión, para movilizar todos los recursos de que puedan disponer (y muchos que deban conseguirse), no tan sólo para reforzar los sistemas sanitarios para enfrentar adecuadamente la pandemia, sino también los sistemas de protección social para ir en auxilio de los sectores más vulnerables de la población, asegurar su subsistencia, proteger sus ingresos y fuentes laborales.

El gobierno ha anunciado , hasta ahora, tres paquetes fiscales que buscan reforzar el sistema público de salud, defender los empleos y los ingresos de los trabajadores, proteger las fuentes laborales, inyectar liquidez al sistema financiero para ir en auxilio de las pequeñas y medianas empresas, además de ir en auxilio de los sectores informales de la economía. Trabajadores por cuenta propia e independientes, sin descarta un apoyo a las grandes empresas (en condiciones no precisadas) que hoy enfrenta graves problemas de viabilidad.

Sin poder dimensionar aún la magnitud de este esfuerzo fiscal, existe un extendido consenso de que todas estas medidas anunciadas por el gobierno son del todo insuficientes para garantizar una efectiva protección a una inmensa mayoría de la población que se ha visto impactada no tan sólo por la emergencia sanitaria sino también por el estallido social que viviera el país en meses anteriores.

No es posible, ni siquiera imaginable que países como Chile puedan implementar planes fiscales tan importantes y millonarios como el que implementan países desarrollados, pero es igualmente evidente que el país está en condiciones de hacer un esfuerzo bastante mayor que el anunciado hasta ahora por las autoridades. El país, que ostenta el liderazgo en el ingreso per cápita en América latina, aún cuenta con fondos soberanos y su capacidad de endeudamiento es bastante mayor que muchos de los países en la región.

La propia normativa que permitiría al Banco Central comprar bonos del tesoro en el mercado secundario, abre una nueva vía de financiamiento al esfuerzo fiscal. Otro debate es si deba comparar directamente esos bonos al gobierno, convirtiéndose en caja pagadora. Ese es otro debate que deberá ser asumido en el marco del proceso constituyente.

Es muy preocupante que más de 56.000 empresas, incluyendo a algunas grandes empresas, hayan optado por acogerse a la ley de suspensión temporal del empleo que, si bien mantiene la relación contractual y las cotizaciones previsionales, implica una merma progresiva de los ingresos de los trabajadores, financiada con sus propios fondos e cesantía.

Como es igualmente preocupante que el ministerio del Trabajo haya recibido, hasta ahora, más de 300.000 cartas de despido.

No deja de ser relevante el fondo reunido por la Confederación de la Producción y el Comercio para contribuir a paliar la emergencia. O las donaciones de insumos sanitarios de algunos empresarios pero todo aquello no parece ser una contribución suficiente. También los grandes empresarios pueden hacer más.

Un importante número de alcaldes han alertado de los riesgos de lo que denominan una verdadera “pandemia social”, en alusión a la situación que enfrenta los sectores más vulnerables del país, cuyas precarias estrategias de supervivencia, se han visto fuertemente afectadas por la emergencia sanitaria, que hoy enfrentan , además de la amenaza sanitaria, la amenaza del hambre.

Diversos economistas y profesionales de oposición han propuesto reiteradamente establecer una renta básica universal, como han hecho otros países, que permita asegurar un ingreso mínimo garantizado para una inmensa mayoría de los chilenos afectado por la emergencia,

El reciente anuncio del gobierno recoge de manera muy parcial e insuficiente la propuesta de la oposición, al establecer “un ingreso familiar de emergencia”, inferior al salario mínimo y decreciente, por los meses de mayo, junio y julio, ateniéndose a su reiterada costumbre de ofrecer el máximo del mínimo (maximin), que no asegura una subsistencia digna para las familias durante la presente emergencia.

No es del todo evidente que el registro social de hogares se constituya en la mejor referencia para seleccionar a los beneficiarios de este ingreso mínimo familiar. Los criterios debieran ser de la máxima inclusión posible y no tan sólo el 60 % de los más vulnerables. Quizás el criterio debiera ser el inverso, el de la exclusión de los sectores de más altos ingresos.

El manejo económico de la crisis

Nadie puede dimensionar aún el impacto económico que tendrá la crisis sanitaria a nivel global, aunque es más que evidente que el mundo ha entrado en una profunda recesión, con sensibles bajas del PIB en los países desarrollados y con mayor razón en países emergentes. Los principales socios comerciales de la región región- China y EE.UU.- han sufrido fuertemente este impacto que no puede menos que reflejarse con fuerza en nuestro país en el país.

Como tampoco nadie puede predecir la velocidad de la recuperación, por más que algunas proyecciones- en base a supuestos inciertos- proyecten una recuperación rápida para Chile,

En lo inmediato, organismos como el FMI, proyectan una baja del 4,5 % del PIB para este año en nuestro país, mientras que el Banco Central una más moderada, en torno al 2,5 %.

Como sea el impacto económico es fuerte y todo apunta a un laborioso y más bien largo proceso de recuperación, en donde el Estado deberá jugar un rol protagónico, como el que hoy demandan todos los sectores, aún los más neo liberales, ofreciendo una gran oportunidad para redefinir el sentido y futuro del país.

Ser de oposición en tiempos de pandemia

No es fácil hacer oposición, cuando el país demanda unidad antes que divisiones, acuerdos antes que confrontaciones, colaboración antes que obstruccionismos.

Sobre todo cuando se trata de una oposición fuertemente fragmentada y dividida. Sin consensos básicos ni diseños compartidos. Con ausencia de liderazgos. Una oposición que no siempre logra distinguir lo principal de lo accesorio, como quedara demostrado con la reciente elección de la mesa de la Cámara de Diputados.

Todo ello agravado por una profunda desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema político (incluido el gobierno, parlamento, partidos y líderes políticos, con la probable excepción de algunos alcalde). Además de medios de comunicación fuertemente sesgados, incapaces de expresar la diversidad social, ideológica y política del país).

Pero esos son, apenas, datos de la causa. La profunda crisis social que hoy vive el país, fuertemente agravada por la crisis sanitaria que enfrena el planeta. Interpela por igual al gobierno y oposición, para estar a la altura de los enormes desafíos que hoy enfrenta el país.

No es enteramente justa la crítica al boleo formulada por el ex presidente Lagos a los partidos de oposición que en su mayoría han tendido a apoyar las medidas sanitarias y de emergencia dictadas por el gobierno para enfrentar la emergencia, incluidas aquellas que restringen temporalmente algunas garantías constitucionales.

Los mayores disensos están centrado en las débiles e insuficientes medidas de protección social adoptadas por el Ejecutivo para ir en auxilio de los sectores afectados por la emergencia.

Es indispensable que la oposición, en su más amplia diversidad y heterogeneidad, asuma un rol más protagónico y propositivo no tan sólo para proteger los sectores más vulnerables, apoyando la acción de los alcaldes y el financiamiento de los municipios, sino también para reafirmar el itinerario institucional y asumir las demandas sociales visibilizadas a partir del 18 de octubre.

Tan importante como lo anterior, hoy se trata de mirar más allá de la emergencia, asumiendo que aún existe un conflicto social no resuelto. Que el país debe cumplir con el proceso constituyente acordado y que muy probablemente nada será igual una vez superada la crisis sanitaria.

No deja de ser significativo que Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, afirme que Chile debería avanzar hacia un Estado de bienestar, inspirado en el modelo de la social democracia europea.

Parece haber llegado la hora en que la oposición enfrente los debates de fondo y defina con claridad sus propuestas de futuro. Que se una en torno a la emergencia. Reconstruyendo sus lazos con el movimiento social que busca representar. Abierta al diálogo y la búsqueda de acuerdos, pero sin temor o inhibiciones para marcar diferencias y confrontar ideas.